

Arantza Acha

Directora de UN Etxea



Fuente: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa. lamoncloa.gob.es. Ministerio de la Presidencia.

Sevilla recibió, a principios de julio de 2025, a miles de representantes de gobiernos, organismos internacionales, instituciones financieras, redes de sociedad civil y actores territoriales de todo el mundo. Durante cuatro días, la ciudad se convirtió en un espacio donde convergieron expectativas, preocupaciones y la sensación de que el reloj del desarrollo sostenible corre más rápido que nuestra capacidad de respuesta colectiva. La 4.^a Conferencia de Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4) era, para muchas de las personas participantes, una cita decisiva: por la urgencia de movilizar recursos, por la necesidad de corregir el rumbo de una arquitectura financiera global que ya no responde a la magnitud de las crisis actuales y, de forma más acuciante, la demostración de que el multilateralismo sigue vivo. Desde la desigualdad creciente hasta la emergencia climática, pasando por el retroceso democrático y el aumento del gasto militar, el sistema internacional llegaba a Sevilla con síntomas evidentes de agotamiento estructural.

Para quienes trabajamos desde la sociedad civil, los territorios y la cooperación internacional, las expectativas iban más allá de un nuevo documento de consenso. Buscábamos un reconocimiento claro de que, sin cambios profundos en la gobernanza financiera internacional, especialmente en deuda, fiscalidad glo-

bal, financiación climática y bienes públicos, no hay posibilidad de cumplir la Agenda 2030. También esperábamos una estructura de negociación abierta y alineada con la práctica del multilateralismo que necesitamos ahora mismo: inclusivo, en el que la sociedad civil, los gobiernos locales y regionales, las comunidades y los movimientos sociales no fuéramos asistentes, sino agentes activos. Y también queríamos que Sevilla reconociera una evidencia que desde lo local llevamos años demostrando: que no hay desarrollo sin territorios; que las transformaciones suceden allí donde se vive, se cuida, se produce y se sostienen derechos; y que la financiación solo es útil si se alinea con esas realidades y necesidades territoriales.

Con esa mezcla de urgencia y esperanza llegamos a la FfD4. Lo que encontramos fue un escenario complejo. Por un lado, tensiones entre países, fracturas en torno a la fiscalidad global y un documento final que solo aborda parcialmente la gravedad del momento. Por otro, una energía social y territorial sorprendentemente robusta, un reconocimiento incipiente del papel central de ciudades y regiones, y la aparición de una herramienta inédita: la Sevilla Platform for Action (SPA), que por primera vez sitúa la localización de la financiación en el centro de la arquitectura global.

Futuro en Común lo describió como un balance agri dulce: un sistema internacional que se vuelve a examinar en medio de una crisis sistémica y que, con el Compromiso de Sevilla, ofrece avances parciales y referencias relevantes, aunque también deja importantes vacíos al no incorporar compromisos realmente vinculantes en materia de desigualdad, fiscalidad, deuda o derechos humanos. La misma plataforma denunció que países del norte global bloquearon avances hacia un marco multilateral para la deuda soberana o una Convención Fiscal de la ONU, eligiendo proteger un sistema donde el poder continúa concentrado en pocas manos.

Esa combinación de agotamiento de un modelo global y vitalidad social marcó el tono de la conferencia. Futuro en Común lo describió como un balance agri dulce: un sistema internacional que se vuelve a examinar en medio de una crisis sistémica y que, con el Compromiso de Sevilla, ofrece avances parciales y referencias relevantes, aunque también deja importantes vacíos al no incorporar compromisos realmente vinculantes en materia de desigualdad, fiscalidad, deuda o derechos humanos. La misma plataforma denunció que países del norte global bloquearon avances hacia un marco multilateral para la deuda soberana o una Convención Fiscal de la ONU, eligiendo proteger un sistema donde el poder continúa concentrado en pocas manos. Y tampoco dejó de percibirse que, en Sevilla, reapareció un riesgo conocido: el de que la participación de la sociedad civil se vea restringida en las fases más sensibles. Hubo momentos clave en los que el acceso a la información y los espacios de diálogo fueron limitados, lo que invita a reflexionar sobre cómo fortalecer la apertura y la confianza en procesos futuros.

Pero lo más revelador, quizás, fue comprobar que, incluso en ese contexto, la sociedad civil internacional no retrocede. Más de mil personas participaron en el Foro de la Sociedad Civil previo a la conferencia, dando forma a propuestas concretas desde feminismos, ecologismos, sindicatos, pueblos indígenas, juventudes y movimientos migrantes. Esa densidad

social muestra que, en tiempos de crisis democrática y ascenso de discursos autoritarios y supremacistas, la sociedad civil sigue siendo la principal defensora del bien común y de las reglas compartidas. Y recuerda que, antes que documentos, necesitamos comunidades políticas capaces de sostener el lenguaje de los derechos, la institucionalidad y la cooperación.

Una manera de entender por qué Sevilla importó es mirar la cuestión desde la financiación. Durante décadas, «financiación para el desarrollo» se ha contado como un flujo unilateral: recursos que viajan desde donantes hacia países receptores. Pero la realidad es más compleja. La financiación es un camino de doble sentido. Los territorios necesitan recursos para sostener servicios públicos, gestionar transiciones climáticas y garantizar derechos; pero también necesitan instituciones sólidas, cohesión social, transparencia, visión de largo plazo y capacidad técnica para que esa financiación tenga impacto real. Sin esa base territorial, la financiación se vuelve volátil, insuficiente o incluso contraproducente. Esa doble direccionalidad, que entiende la financiación para el desarrollo y el desarrollo para la financiación como dimensiones interdependientes, comenzó a adquirir fuerza en Sevilla como un enfoque emergente que aporta una mirada más completa para pensar la financiación desde la realidad de los territorios.

Este debate se cruza con otro igual de decisivo: qué medimos para saber si avanzamos. Uno de los aportes más importantes de organizaciones como Futuro en Común fue revisar críticamente el PIB como indicador dominante. El PIB ignora desigualdades, cuidados, deterioro ambiental y distribución de riqueza; y en un contexto de crisis solapadas, insistir en él como brújula de políticas públicas se vuelve insostenible. En el evento «Más allá del PIB», celebrado en el marco de la conferencia, se abrieron caminos hacia métricas que reflejen bienestar, equidad, bienes públicos, sostenibilidad y trabajo de cuidados. Entender esto es crucial para la financiación: lo que medimos condiciona lo que priorizamos; lo que priorizamos orienta hacia qué se destinan recursos; y eso define si impulsamos un desarrollo centrado en la vida o un crecimiento que agota comunidades y territorios.

Y es precisamente en ese cruce entre financiación, métricas y territorio donde adquiere sentido la Sevilla Platform for Action. El Compromiso de Sevilla, acordado en el marco de la conferencia, se acompaña de

una plataforma de acción que reúne más de 130 iniciativas destinadas a convertir ese acuerdo en avances concretos y medibles. La SPA se plantea como un esfuerzo colectivo de múltiples gobiernos, organismos internacionales, instituciones financieras y agentes no estatales para orientar la financiación internacional hacia soluciones que aceleren el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este marco general incluye iniciativas promovidas por diversos actores, y entre ellas destaca la propuesta impulsada conjuntamente por el Gobierno de España, ONUHábitat y la OCDE: *Localizing finance to drive systemic impact for the achievement of the 2030 Agenda*. Esta iniciativa tiene un peso especialmente significativo porque sitúa el papel de los territorios en el centro de la financiación para el desarrollo. Con ello se avanza en la idea de que la transformación sistémica solo será posible si la financiación incorpora, desde su diseño, la diversidad, la capacidad y las prioridades de ciudades, regiones y comunidades.

La propia SPA se construyó sobre un proceso participativo amplio, con más de 1.000 personas involucradas en 30 talleres en todas las regiones del mundo, lo que muestra que el enfoque territorial no se concibe como un complemento, sino como un principio estructural. Dentro de ese marco, la iniciativa liderada por la Coalición Local2030 contribuye a reforzar a escala global una premisa que durante años se defendió desde la sociedad civil y desde los gobiernos locales y regionales: que los territorios no son únicamente espacios donde se ejecutan decisiones globales, sino agentes con capacidad política, institucional y técnica para orientar inversiones, generar confianza, sostener cambios estructurales y evaluar resultados.

Al integrarse en la SPA, esta iniciativa territorial aporta una arquitectura que reconoce que el impacto real del Compromiso de Sevilla dependerá, de forma muy significativa, de la capacidad de los territorios para impulsar alianzas multiactor, fortalecer sistemas locales y regionales, y hacer que la financiación internacional se traduzca en transformaciones concretas y sostenibles. Con ello, esta iniciativa no solo articula políticas globales, sino que ayuda a anclar, de manera explícita, el papel de los territorios en el nuevo multilateralismo que muchos actores, dentro y fuera de Sevilla, consideramos indispensable para sostener derechos, instituciones y bienes comunes ante la incertidumbre actual.

La SPA y el Bilbao Blueprint convergen en un diagnóstico común: la transformación se sostiene desde el territorio, pero necesita instituciones robustas, alianzas multiactor, métricas adecuadas y herramientas financieras innovadoras y accesibles. Ambos marcos recuerdan que la estabilidad fiscal, la legitimidad institucional y la cohesión social no son «ingredientes opcionales», sino requisitos previos para atraer inversión para el desarrollo sostenible y garantizar un impacto positivo en la ciudadanía y el entorno.

La iniciativa también tiene un objetivo político central: crear una comunidad de práctica multiactor para acelerar la localización de los ODS mediante cooperación descentralizada, empoderando a ciudades y regiones como motores de transformación. Esto se traducirá en fortalecer capacidades de gobiernos locales y otros agentes financieros, y fomentar estrategias de inversión basadas en el lugar, coherentes con prioridades locales y diseñadas para «no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás».

Una de las aportaciones más potentes para aterrizar este enfoque territorial es el Bilbao Blueprint, que ofrece un marco práctico para llevar estas ideas a la realidad. Su primera línea de impulso insiste en cultivar un entorno habilitante donde la ciudadanía tenga sentido de pertenencia, participación y apropiación del proyecto colectivo; sin esta base, la financiación no es estable ni sostenible. Su segunda línea propone fortalecer capacidades e innovación en todos los actores locales, instituciones públicas, sector privado, sociedad civil y academia, para integrar los ODS, profundizar en alianzas multiactor y movilizar conocimiento territorial. La tercera línea se centra en construir una visión territorial compartida, traducida en iniciativas cocreadas por los agentes locales capaces de transformar sistemas y evitar la fragmentación. Y la cuarta promueve la localización de las finanzas mediante inversiones sistémicas, arquitecturas coherentes de financiación nacional y subnacional, aprendizaje horizontal, mecanismos de desriesgo y estrategias que permitan que la inversión llegue también a escala comunitaria.

[...] uno de los aprendizajes más importantes que deja Sevilla es que el territorio no es una escala menor ni una «implementación»: es una arquitectura política, un espacio donde la ciudadanía percibe si la democracia existe, si los derechos se garantizan, si la vida se cuida y si las instituciones responden. Allí donde la política global parece ajena o distante, el territorio tiene capacidad para recomponer confianza y sostener el contrato social. Y allí donde la crisis multiplica desigualdades, la colaboración entre gobiernos locales, sociedad civil, empresas responsables y universidades se vuelve imprescindible para evitar que la fractura social se convierta en un vacío democrático aprovechado por proyectos autoritarios.

La SPA y el Bilbao Blueprint convergen en un diagnóstico común: la transformación se sostiene desde el territorio, pero necesita instituciones robustas, alianzas multiactor, métricas adecuadas y herramientas financieras innovadoras y accesibles. Ambos marcos recuerdan que la estabilidad fiscal, la legitimidad institucional y la cohesión social no son «ingredientes opcionales», sino requisitos previos para atraer inversión para el desarrollo sostenible y garantizar un impacto positivo en la ciudadanía y el entorno. Y ambos insisten en que la financiación debe dejar de fragmentarse en proyectos aislados y orientarse hacia sistemas completos: tejido económico, cadenas de valor, servicios públicos, ecosistemas naturales o cuidados comunitarios.

Mirar estos avances en el contexto del multilateralismo actual es revelador. En un momento en el que parece ganar terreno la desinstitucionalización, la ruptura del consenso, la desregulación como valor y la impunidad como práctica, estas iniciativas representan una defensa pragmática de lo común. Si el multilateralismo quiere seguir siendo relevante, debe reconectarse con los territorios y con los agentes que sostienen la demo-

cracia en lo cotidiano: instituciones públicas locales, sociedad civil, sector privado responsable, academia, cooperativas, movimientos sociales, redes comunitarias y la ciudadanía. Un multilateralismo que viva solo en las cumbres está condenado a ser sustituido por relatos que prometen fuerza sin derechos y eficiencia sin democracia.

Por eso, uno de los aprendizajes más importantes que deja Sevilla es que el territorio no es una escala menor ni una «implementación»: es una arquitectura política, un espacio donde la ciudadanía percibe si la democracia existe, si los derechos se garantizan, si la vida se cuida y si las instituciones responden. Allí donde la política global parece ajena o distante, el territorio tiene capacidad para recomponer confianza y sostener el contrato social. Y allí donde la crisis multiplica desigualdades, la colaboración entre gobiernos locales, sociedad civil, empresas responsables y universidades se vuelve imprescindible para evitar que la fractura social se convierta en un vacío democrático aprovechado por proyectos autoritarios.

Quizá el sentido profundo de Sevilla resida justamente en esta tensión: entre límites y posibilidades, entre bloqueos institucionales y creatividad social, entre amenazas globales y capacidades locales. Si algo mostró la conferencia es que la financiación no es un tema técnico, sino político; que el multilateralismo no es un ritual diplomático, sino un espacio donde se negocia el futuro de la humanidad; y que los territorios no son beneficiarios pasivos, sino protagonistas indispensables de cualquier arquitectura global que aspire a ser democrática, justa y sostenible.

En tiempos en los que parece querer triunfar la impunidad, la ruptura de valores compartidos y un individualismo que desprecia el bien común, Sevilla nos recuerda que aún existen espacios, si bien imperfectos, incompletos, y disputados, en los que es necesario invertir para construir un futuro desde la cooperación, la institución y la convivencia. Y que ese futuro, si quiere ser posible, tendrá que sostenerse desde los territorios, desde la sociedad civil, desde las instituciones públicas y desde todos los actores que se niegan a renunciar a la idea de que el desarrollo y la democracia solo pueden prosperar si se construyen juntos. ■